

¿Persiste el *bloqueo institucional* que queríamos superar?

Intervención para el panel inaugural del MAC3 / desde nodo Barcelona

1. Diagnóstico general del contexto municipal: límites del asalto.

La entrada en las instituciones vino empujada por un diagnóstico compartido: tras grandes movilizaciones en defensa de derechos básicos, tras usar mecanismos para legitimar institucionalmente la demanda de justicia social que había en la calle (como la ILP de la PAH), la respuesta institucional se producía en forma de bloqueo. Agotadas todas las vías para cambiar las leyes, se optó por una entrada en las instituciones. La pregunta es si se ha superado en alguna medida ese “bloqueo institucional”. Todo apunta a que no del todo.

Por otro lado, la entrada en las instituciones no buscaba solo “resolver los problemas más acuciantes”, sino producir una forma de gobierno de lo común diferente. Diferente significaba con mayor participación, mayor capacidad de control de las decisiones públicas, con un reconocimiento de las formas de autogobierno de la ciudad y con la capacidad para redistribuir el poder urbano. Si las capacidades para decidir y orientar la agenda política están en manos de grandes oligopolios que se asientan y reproducen en espacios administrativos, no queda otra que censar y auditar todas las puertas traseras por las que entra el capital privado. ¿Se han desarrollado medidas para controlar a los poderes fácticos de la ciudad? Si bien hay una gran conciencia de este problema, todo apunta a que no del todo. Las formas de revertir la financiarización del territorio, necesitan medidas tan radicales como las que dejaron penetrar al capital financiero en las tripas administrativas y urbanas. No actuar en las consecuencias, sino en el origen de ese control privado de los recursos comunes.

En el campo de la vivienda y el suelo, aspectos centrales de la economía urbana y vector central de desposesión, se han hecho patentes todas las limitaciones en materia de política municipal. El modelo como tal sigue intacto, funcionando en base a la lógica de la mercantilización del suelo, la generación de rentas que irradian a buena parte del territorio urbano, y su financiarización. Un factor añadido recicla este modelo: buena parte de las estrategias de inversión financiera se han trasladado al mercado del alquiler, la vivienda de segunda mano y las viviendas turísticas, generando una dinámica especulativa y de burbuja en los espacios de la ciudad consolidada. Cooperativas de vivienda y espacios autogestionados empujan en buena dirección pero quedan desarmados frente a un problema mayúsculo que se traduce en precariedad material y expulsión residencial. Barcelona se encuentra ante la paradoja de que una fuerza política muy sensibilizada con el problema de la vivienda que se topa con enormes limitaciones y que, además, se encuentra ante una nueva emergencia habitacional.

Siendo más concretos, resaltamos algunos puntos que estaban (y están) en la agenda para ver cómo se traduce o no esa persistencia del bloqueo institucional.

2. Desigualdades sociales y medidas para revertirlas

Las desigualdades sociales y urbanas han aumentado en ciclos de crecimiento económico. El producto de la crisis es una ciudad más dual y con índices de desigualdad territorial crecientes. El derecho a la vivienda y la exclusión residencial siguen siendo temas centrales, sin una solución contundente, pese a todos los mecanismos institucionales puestos en marcha como la construcción de parque público, cesión de uso de suelo público para cooperativas de vivienda, empresa público-privada para construir vivienda de alquiler asequible, planes de emergencia y mediación, etc. Son medidas importantes, pero el paisaje urbano-capitalista impone su lógica. La PAH ha señalado que uno de los problemas es que apenas se han implementado medidas sancionatorias como las multas a pisos vacíos ya censados, que por otro lado es un registro inacabado del que se desconocen los datos correctos. Esas medidas podrían acelerar la construcción de parque público y amonestar la especulación, que son las vías disponibles para desmercantilizar la vivienda a escala local. Estas formas de hacer reverberan en otras áreas relacionadas directamente con la desigualdad. En temas como la Ley de Pobreza energética, el Ayuntamiento de Barcelona es el único municipio que ha creado un organismo sancionador, pero de nuevo las multas apenas se han llevado a cabo.

Otras medidas, como el plan de choque de 160 millones de euros que se presentó en su momento, sigue en proceso de implementación. Perfectamente enfocado en una de las barreras físicas que mejor demarca las desigualdades territoriales en la zona metropolitana de Barcelona (eje Besós), todavía tiene que mostrar sus resultados. Por otro lado, se han puesto en marcha iniciativas muy importantes como la cooperativa de intervención social donde participan 15 manteros. Este es un tema resbaladizo para el ayuntamiento de Barcelona, que ha entrado en disputa con las formas punitivas de gestionar el conflicto por parte de la guardia urbana o incluso por una parte notable de la opinión pública. En Barcelona hay más de 200 manteros. La cooperativa es un paso adelante, pero el propio gobierno local sabe que es insuficiente y actualmente ya intenta desarrollar otras políticas de mayor envergadura. Junto a problemas tan importantes como la deportación exprés de ciudadanos sin garantías jurídicas, el problema “manteros” depende de las idas y venidas de los titulares mediáticos y de los huecos que dejan las guerras nacionales. Esa es la realidad de una nueva política demasiado dedicada en diseñar “relatos” y con límites a la hora de construir organización.

3. Estrategias urbanísticas y capitalismo urbano

Entre 2003 y 2009, se aprobaron tantos planeamientos urbanísticos como en el cuarto de siglo anterior. Esa herencia, que buscaba una ampliación geográfica de la urbanización y una aceleración del ciclo financiero-inmobiliario, es difícil de contrarrestar en dos años. Esta dificultad se ve claramente en proyectos como los de Glòries, la Meridiana o les Rondes, donde redefinir las operaciones y los contratos ya definidos, supone un punto de inflexión que socialmente (gente que circula o reside en esas zonas) no se percibe como una oportunidad, sino más bien como una parálisis. Cambiar el modelo urbano también pasa por construir una hegemonía diferente a la que ha normalizado la ciudad como un lugar de tránsito y consumo.

En una línea esperanzadora, se están llevando a cabo proyectos donde demandas existentes en el territorio, se intentan responder con un urbanismo “más participado” (es el

caso del teatro Arnau, en Paral·lel). Esto supone un reto adicional que, en el fondo, define cómo funciona el capitalismo urbano barcelonés. Mejorar las infraestructuras, o implementar planes de participación urbana, incluso mejorar la sociabilidad de un barrio, puede generar efectos perversos. Si las condiciones urbanas mejoran debido a la intervención pública, el precio del suelo puede incrementarse y ser motivo de expulsión de quien no pueda asumir un alquiler más elevado. Más mejoras urbanas o más participación no siempre son sinónimo de más igualdad. Democratización no siempre supone redistribución.

Esto lo saben muy bien las promotoras y las bolsas de capital financiero que, por ejemplo, ya están presionando a vecinos del barrio de Sant Antoni para poder obtener la propiedad vertical de fincas cercanas al Mercat de Sant Antoni, de próxima apertura (así como en muchos otros rincones de la ciudad). En ese sentido, se habla de “gobernar los efectos” de las políticas de mejora. Pero el problema de nuevo está en la incapacidad por desarrollar políticas desmercantilizadoras: sin la capacidad efectiva para poner en marcha medidas como la cesión obligatoria de vivienda vacía o el derecho de tanteo y retracto difícilmente se puede consolidar un control democrático del territorio. Otras medidas, como nuevas formas de tasación de las plusvalías urbanas, necesitan un estudio sobre la distribución de la propiedad, de lo contrario es difícil saber a quien se tasa o quien lidera las dinámicas especulativas a escala urbana o metropolitana. Los impedimentos administrativos para desarrollar este tipo de investigaciones son muchos, los candados están bien puestos, por eso las alianzas con movimientos y colectivos de la ciudad debería ser una apuesta. No hablamos de más concursos públicos y contratos, sino de nuevas formas de organización que asuman el carácter conflictivo (y por ello, productivo) de estas relaciones.

4. Recuperar poder urbano: participación, remunicipalización y modelo de ciudad.

En su proyección internacional, Barcelona tiene un problema con los conocidos “relatos”. Los socios de gobierno de Barcelona en Comú, el Partit Socialista de Catalunya, insiste en la “marca Barcelona” y en la higienización cosmopolita y mediterránea que nutre la imagen internacional de la ciudad condal. En dirección opuesta, ha crecido un relato más centrado en “Barcelona, ciudad de los derechos y la participación”. Ambos se solapan contradictoriamente. Pero en eventos como el Mobile World Congress ambas visiones parecen confluir. Por un lado, el típico evento de ferias y congresos internacionales que han solidificado la imagen de Barcelona como lugar idóneo para invertir. De nuevo, con la promesa de abrir nuevos mercados, que en el fondo es un pretexto para fijar capital fluctuante en el suelo urbano. Por otro lado, propuestas para “cambiar el enfoque” de una feria consolidada, que, como se dice, “no tiene sentido eliminar”, pero a la que se le pueden añadir otros contenidos más colaborativos. En general, esta es una particular tercera vía (ni muy capitalista ni muy socialista) que se ha consolidado en Barcelona, no solo por parte de quienes ocupan cargos electos, sino por parte de un nuevo tercer sector que busca dar mayor contenido social a la estructura existente. Esto no es un modo de hacer nuevo, sino más bien una realidad sedimentada en las formas de operar de la ciudad durante los últimos 30 años. Una cultura política de la que todos nos tenemos que desprender.

Muy cercano a este legado del tercer sector, la gobernanza participativa tiene una larga trayectoria en Barcelona. Ese conjunto de estructuras y mecanismos para incluir nuevas voces en las decisiones públicas, tanto ha servido para involucrar a sectores excluidos en el diseño de políticas urbanas como para contener conflictos urbanos, protestas o posibles formas de autogobierno. Esta ambivalencia es típica del modelo de ciudad y revertirla plantea varios retos. Tal vez, el principal, es que no se trata tanto de repartir poder urbano a través de consultar o informar a la ciudadanía, sino de extraer la capacidad de decisión detentada por actores privados. La penetración de entidades como CaixaBank en las juntas administrativas de empresas públicas es un buen ejemplo. Son imprescindibles los procesos de auditoría de empresas públicas, como el Patronato de Vivienda u otros organismos como el Consorcio de Turismo. Como señalan miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana del Deute, “ese es el gran agujero negro donde se acumulan una deuda importante, de unos 8000 millones de euros”. Por otro lado, y en una dirección que el Ayuntamiento está trabajando, la remunicipalización de servicios básicos, como el agua, es un tema vertebral. En ese proceso, se necesita no solo una presencia técnica, sino que se cuente con la participación ciudadana, a través de organismos como los que se están poniendo en marcha en Terrassa. En esa misma dirección, la posibilidad de un marco jurídico que garantice las formas comunitarias de gestión y autogobierno de infraestructuras de la ciudad, si bien siguen suspendidas en el devenir de un modelo que no encuentra un enfoque alternativo claro, señalan hacia una forma de “participación” con un salto cualitativo.

En definitiva, es necesario desplazar la participación a formas de autogobierno y de acción comunitaria, pero a la vez expulsando al capital privado de la arquitectura institucional. De lo contrario, y este diagnóstico es compartido con diversas áreas del Ayuntamiento, la participación acaba siendo una forma de gestionar y contener el conflicto urbano.

5. El futuro del “asalto institucional” en clave europea

Hay varios retos que se han ido haciendo más grandes en los últimos tiempos. Muchos de ellos tienen que ver tanto con la escala municipal como con la escala estatal, pero también con la camuflada escala continental, casi ausente desde las últimas elecciones europeas. Señalamos tres que juegan más o menos en este esquema multinivel.

En primer lugar, un reto más bien de clave interna: la incapacidad para producir organización más allá de la estructura-partido, especialmente en aquellos espacios donde recaba mayores apoyos electorales, que son las zonas de clase trabajadora. Pero en cuanto a la coyuntura, en clave externa, hay dos cambios. Por un lado, la inesperada resistencia del bipartidismo, columna vertebral del régimen del 78 que cedió durante un tiempo pero parece haberse estabilizado mucho más de lo que se supo pronosticar, con el apoyo además de esa muleta restauradora que es Ciudadanos. Ciertamente, los elementos clave tras la crisis de régimen que abrió el 15M siguen latentes: crisis institucional y corrupción, políticas de austeridad neoliberal y crisis de las clases medias. Pero el gran interrogante es cómo construir esos problemas como campo de batalla política y qué tipo de organizaciones y relaciones entre municipios y regiones se deben construir.

En segundo lugar, la crisis de régimen parece redefinirse en torno a la crisis territorial. Este vector se manejaba solo en Cataluña junto a otros como la crisis económica, institucional o la corrupción pero ahora, adquiere centralidad en todo el territorio español, en forma de polarización nacional. Alejados de las hipótesis de otros colectivos, creemos que la idea de un proceso constituyente en un solo territorio de España, sin construir solidaridades a lado y lado del Ebro, es del todo imposible. Asegurar que “aquí ya tenemos nuestro proceso constituyente y eso es bueno para mejorar España” es una pirueta para no aceptar que faltan alianzas territoriales en la misma escala que opera el poder. Esta suspensión de las alianzas territoriales queda todavía más patente si miramos cómo se toma la escala europea en las visiones independentistas. Europa aparece en el debate como institución que “puede o no” aceptar a Catalunya como Estado miembro, y ahí se lanzan todo tipo de visiones supuestamente refinadas sobre las políticas de integración europeas y el rango de posibilidad que han abierto procesos anteriores. Lo que está completamente ausente de estos debates y estrategias es cómo opera la geografía política europea. El modelo de especialización financiero-inmobiliario, no es tanto una elección nacional, como una medida de adaptación necesaria para “integrarse” en la división continental del trabajo. Esto vale tanto para Cataluña como para España. En Cataluña, esto es un anatema. Parece que la posición de subordinación del sur europeo frente al norte es algo que, una vez más, ahora no toca.

En ese sentido, Catalunya ya está “integrada” en la economía política europea y de esa relación depende su capacidad de autonomía o, si se quiere, su “libertad”. Un proyecto que no solo tenga en cuenta esto, sino que parta de ese diagnóstico para poder crear alianzas, difiere completamente del que ahora mismo comanda el proyecto independentista. El peso de la identidad nacional como “utopía disponible” es más fuerte que el peso de un proyecto realmente emancipador. La ilusión ciudadana está más que justificada, y nos ha dejado prácticas de autoorganización que ya son históricas, pero de eso no deriva que los objetivos del proyecto independentista sean consolidables. No solo por el imperio de la ley, sino también por el orden del capital.

En tercer lugar, hay una apuesta por parte de Barcelona en Comú para generar alianzas con otras ciudades en busca de superar los límites competenciales e intentar rebasar el control de mando del Estado (y del resto de escalas). De forma similar a cuando Maragall buscó superar las imposiciones de la Generalitat a través de la Carta Municipal, adquiriendo más recursos y recuperando el Área Metropolitana de Barcelona, la estrategia se sitúa en la formación de redes de ciudades o en las alianzas con ayuntamientos del área metropolitana (como ha ocurrido en el Pla de Barris del eje Besós). Las dificultades son muchas. En unas jornadas organizadas por Barcelona en Comú (Municilab) desde Marea Atlántica se apoyaba la necesidad de una red inter-municipalista, pero también las frustraciones y limitaciones (técnicas, humanas, financieras) para poder consolidarla. El municipalismo en red, confederal, internacionalista, va tomando cuerpo en la agenda. Pero demasiado lento. Es un tema fundamental poder apostar por esa estrategia invirtiendo los recursos necesarios.

6. Analizar la economía política urbana

Finalmente, en Barcelona venimos constatando la necesidad de ampliar nuestra caja de herramientas para entender el ciclo en el que nos encontramos y alimentar las luchas por la conquista de derechos. Tanto desde los espacios de movimiento como en las instituciones carecemos de análisis lo suficientemente trabajados como para incidir en la coyuntura. En pocas palabras, desconocemos realmente qué tipo de capitalismo urbano define a esa gran zona que llamamos área metropolitana de Barcelona. Esto es una tónica que se repite en el resto de ciudades y entorno metropolitanos.

Intuimos que el sector inmobiliario y turístico han ido adquiriendo peso frente a sectores tradicionales como la industria, y que el capital financiero está cambiando sus estrategias de ataque sobre la vivienda, pero desconocemos cómo operan realmente los fondos de inversión, las SOCIMIs y la banca. Sabemos que hay una serie de bloques de capital que operan de forma privada a través de consorcios supuestamente públicos, pero no sabemos en qué consisten esas arreglos. Nos insisten a menudo en que la ciudad despunta en torno a determinados polos, como el logístico (con el puerto de mayor peso en el área mediterránea) o el biomédico y farmacéutico, y que lo hacen en la economía global, pero desconocemos de qué manera. Es en alianzas comunidades-movimiento-institución donde podremos diseñar políticas urbanas transformadoras, y estos diagnósticos compartidos siempre han sido la forma de cambiar las agendas y la orientación de las políticas públicas.

En pocas palabras, se hace necesario ir más allá de los titulares y la construcción de relatos para entender realmente cuáles son los circuitos de valor y las estrategias capitalistas que moldean en el territorio urbano en el que vivimos y actuamos. Solo así podremos estar en situación de construir contrapoder, conquistando derechos materialmente a la vez que construyendo nuevas hipótesis políticas y formas de sentido común. Solo así creemos que vale la pena seguir con el asalto.